

GACETA DE LA PAZ

Del 17 al 23 de abril de 2019

- ProgramaRPR

- www.oim.org.co

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con un especial sobre la difícil situación de seguridad que vive el país; la presentación del nuevo programa para la reincorporación de exguerrilleros de las FARC; las alarmantes cifras que presentó Somos Defensores sobre agresiones a líderes sociales en 2018; el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del ELN a lo largo del río San Juan en Chocó; entre otros.

Especial Alerta Roja de Seguridad¹

¿Qué está pasando con la seguridad?²

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dio la alerta: “Los delitos que afectan la seguridad ciudadana vienen creciendo de manera importante en todo el país y especialmente el hurto. El robo de bicicletas crece a tasas del 35 por ciento. El de celulares, 30 por ciento, y el de personas, 18 por ciento”. Estas fueron tan solo algunas de las alarmantes cifras que Martínez mostró el 27 de marzo ante los integrantes de la Comisión Primera del Senado.

“Tenemos una sociedad desvertebrada, con fenómenos delictivos muy complejos. De 86.000 personas a las que se les imputaron delitos el año pasado, el 58 por ciento son reincidentes (49.000 personas)”, declaró el Fiscal. Por ejemplo, durante el 2018 las autoridades arrestaron en el país a 207.728 facinerosos en flagrancia. Resulta desconcertante que aun cuando los capturaron cometiendo el delito, el 95 por ciento de ellos quedaron en libertad. El problema: los reincidentes en Colombia reciben un tratamiento demasiado benigno.

Tierra de nadie

Pero si el tema urbano es complejo, la realidad del orden público en varias regiones es crítica. En su balance, el MinDefensa muestra que las autoridades capturaron más de 400 integrantes de diferentes grupos armados, como el Clan del Golfo, el ELN y los Pelusos. También resalta los arrestos y las muertes de varios integrantes de esas organizaciones. Sin embargo, esos operativos no han podido devolver la tranquilidad a esas zonas del país.

El ELN ha crecido en número y se ha expandido incluso a territorios donde no estaba, como el occidente de Colombia. Su accionar delictivo también ha aumentado. En los tres primeros meses han dinamitado el oleoducto en 13 oportunidades, casi el doble del mismo periodo del año pasado. Y han ejecutado acciones de gran envergadura e impacto como el carro bomba en la escuela de cadetes de la Policía en Bogotá, que mató a 22 de ellos.

Lo que ocurre con el Clan del Golfo también preocupa. Durante tres años, las operaciones Agamenón I y II arrojaron resultados importantes que llevaron casi a aniquilar completamente esa estructura. No obstante, la presión de esa iniciativa disminuyó ostensiblemente en los últimos meses, a tal punto que permitió a esa banda criminal recomponerse y recuperar nuevamente los hombres, finanzas y territorios que habían perdido.

Algunos justifican este nivel de impunidad con el argumento de que en las prisiones ya no caben más delincuentes. El hacinamiento ha llegado a cuatro o cinco veces la capacidad de los centros de reclusión. Gran parte de esos delincuentes capturados y dejados en libertad ya son profesionales del delito. De los más de 240.000 detenidos, 91.423 ya habían sido arrestados entre 2 y 9 veces, y otros 1.710 capturados por la Policía entre 10 y 40 veces.

Para completar este panorama de inseguridad, habría que añadir la falta de agentes en las calles. Bogotá vive el caso más crítico. Una ciudad como Londres, con cantidad similar de habitantes, tiene un promedio de 3.750 por cada 100.000 personas. La capital cuenta con 238 policías por cada 100.000 habitantes. En el resto del país, la desproporción se mantiene. Municipios como Bucaramanga, Tunja o Popayán tienen en promedio 600 policías por cada 100.000 habitantes.

Las disidencias de las FARC también aumentaron sustancialmente y tienen una presencia muy fuerte, especialmente en el oriente y sur del país. Reclutamientos forzados de menores y una oleada de violencia afecta esas zonas, en las que ni sus antiguos compañeros, hoy desmovilizados, se salvan de las balas asesinas.

En el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre la situación de seguridad, las conclusiones reflejan una rápida degradación en el orden público en el territorio nacional: “La reactivación de la confrontación y la intensificación de la violencia han dejado de ser una hipótesis en varias regiones del país. En el Catatumbo, el norte del Chocó, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, así como en Tumaco, el conflicto no terminó, sino que se transformó con graves consecuencias para las poblaciones”.

“El 60 por ciento de los conflictos armados en el mundo recaen en la violencia en los cinco años posteriores a su resolución. En Colombia estamos en un momento crítico de la transición, con una paz a medias y el conflicto armado que continúa. El país no debe dar marcha atrás”, dijo María Victoria Llorente, directora de este centro de pensamiento e investigación.

¹ Este especial fue publicado originalmente por la Revista Semana, todos los contenidos aquí reproducidos son una síntesis del especial Alerta Roja de esta publicación.

Minas Antipersonales

Un indicador clave de la crisis son las víctimas de minas antipersonal, cifra que ha tenido un alza notable. Luego del descenso de 2012 a 2017, al pasar de 589 a 57 afectados, en 2018 esta cifra subió a 179, lo que equivale a un aumento del 68 por ciento en comparación con 2017. Según el Comité

Internacional de la Cruz Roja, el mayor número de víctimas de estos artefactos corresponde a las regiones en disputa, por lo cual nadie hace desminado humanitario. En 2018, 31 por ciento de las víctimas cayeron en Nariño y el 30 por ciento en Norte de Santander.

Vuelven las masacres

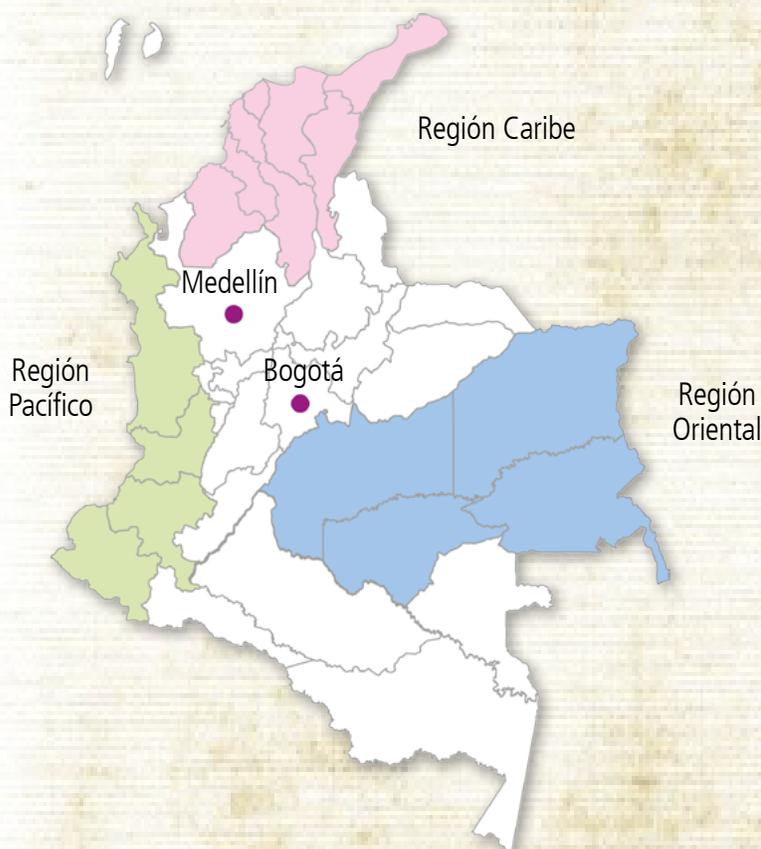
En lo que va del año han sucedido al menos siete masacres en el país, que han dejado 30 muertos —entre ellos, dos mujeres embarazadas— y una larga estela de crueldad: torturas, degollamientos, tiroteos en estado de indefensión. La lista de responsables incluye narcos puros, disidencias de las FARC, grupos posparamilitares, contrabandistas y delincuencia común. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en 2017 se registraron tres masacres; en

2015, seis; y en 2014, cinco. Por eso, preocupa tanto que en los primeros tres meses de este año ya se hayan presentado siete. Para encontrar una cifra parecida hay que regresar hasta 2013, cuando comenzaban las negociaciones de paz con las FARC, y el Clan del Golfo y otras estructuras residuales de la desmovilización paramilitar estaban en auge. En ese año 17 masacres dejaron 82 víctimas.

Aumentan los desplazados

La guerra por el territorio y el narcotráfico también está reactivando el desplazamiento, el flagelo que más víctimas ha dejado en el país. Este fenómeno, que desarraigó a 7,5 millones de personas en los últimos 30 años, tocó piso en 2017 y ahora vuelve a tomar vuelo. La Defensoría del Pueblo registró 51 eventos masivos, en los que 10 o más familias abandonaron su tierra para un total de 12.841 personas. El año pasado, la misma entidad registró 99 casos que afectaron a 35.407 personas, el triple del periodo anterior. Y la tendencia del primer trimestre de 2019 demuestra que este año superará con creces esa cifra.

La mayoría de los desplazamientos masivos de 2017 respondieron a la agresión de un solo grupo armado. Es decir, el que ya controlaba o llegaba a controlar la zona a punta de amenazas. Pero los casos de 2018 y los que van de 2019 tienen un factor común diferente. Ahora el grueso de los casos registra hasta dos y tres responsables. O sea, la gente huye porque queda en medio del fuego de los grupos en disputa.



El norte bajo amenaza del narcotráfico y las bandas criminales³

La seguridad en el Caribe colombiano tiene tres factores ligados entre sí que atentan contra la paz y la tranquilidad de la región: el narcotráfico, la disputa del territorio entre grupos delincuenciales organizados y situaciones puntuales de inseguridad en las ciudades. Hoy por hoy, al sur, los departamentos de Córdoba, Bolívar y Cesar viven la situación más crítica.

Entre las estructuras que representan serios desafíos para la seguridad regional, la más relevante en este complejo escenario es el Clan del Golfo, conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nombre con el que busca dar un ropaje político a sus crímenes. En los últimos tres años recibió duros golpes gracias a las operaciones Agamenón I y II. Sin embargo, esa iniciativa policial-militar, que puso tras las rejas a más de 2.000 integrantes y una veintena de jefes, disminuyó su presión en los últimos seis meses. Hoy el Clan, fortalecido, mantiene un poder omnipresente en varias regiones del Caribe.

El Pacífico no tan pacífico⁴

El balance no podía ser más dramático. En solo una semana se presentaron nueve atentados contra miembros de la fuerza pública con un saldo de ocho muertos y 24 heridos; dos desapariciones forzadas, una explosión en la que murieron ocho indígenas, el desplazamiento masivo de mil nativos por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la voladura de un oleoducto.

Todo sucedió en una misma región: el suroccidente colombiano, integrado por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. De la noche a la mañana pasaron de

una aparente calma tras la firma del acuerdo de paz con las FARC a transformarse en el eje de una espiral criminal que viene en aumento y parece no detenerse.

Por cuenta de esa nueva dinámica delictiva, la violencia que creían cosa del pasado volvieron a anular la tranquilidad ciudadana. Incluso las temidas vendettas mafiosas que llenaron de horror ciudades como Cali y Tumaco, o regiones como el norte del Valle, Nariño y el Pacífico caucano, retornaron con su huella sangrienta.

Zona Oriente: La retaguardia disidente⁵

En la región Oriental a medida que aumenta la distancia con el centro del país, el fantasma de la violencia crece, encarnado, sobre todo, por las disidencias del Bloque Oriental. La estructura más poderosa de la extinta guerrilla dejó, naturalmente, el grupo residual más poderoso. Unidos bajo el mando de Gentil Duarte está buena parte de los 3.000 disidentes que hay en todo el país. Las alertas de la Defensoría del Pueblo en Meta y Guaviare advierten la presencia de esas estructuras en la mayoría de los municipios. Se ubican sobre todo en las zonas de reserva forestal, parques nacionales o resguardos indígenas donde hay coca.

Pero no solo las disidencias juegan en el ajedrez criminal de la región. Allí hay noticia del Clan del Golfo y los Puntilleros, herederos de los Bloques Meta y Libertadores del Vichada de las autodefensas. Además, la gente habla de un grupo reciente autodenominado Nuevo Renacer. También han advertido sobre la incursión del ELN por la cuenca del río Guaviare, proveniente del Vichada.

Crimen organizado: se prenden las alarmas en Medellín⁶

Medellín es la vieja escuela del crimen organizado. Desde hace más de treinta años en la capital de la montaña se viene consolidando un entramado criminal y narcotraficante. Esto se comprueba en la estructura de la Oficina de Envigado, que no ha decrecido cuando sus capos caen en manos de la justicia. Antes bien, se fortalece. El propio secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, reconoce que en todos estos años el crimen creció como una empresa con metas a largo plazo y que de esa manera deben venir las victorias de las autoridades: paso por paso.

Sin embargo, esa solución parece no ir bien del todo, pues este año, a cierre del 10 de abril, Medellín tenía 184 asesinatos, 28 más que en 2018. Lo aterrador ha estado en que muchos de estos crímenes han ocurrido por tandas de decenas cada fin de semana o con la aparición de cuerpos en bolsas negras. Esto sin contar el último caso que estremeció a los paisas: un niño de 14 años que asesinó a dos comerciantes en la comuna 13.

Seguridad: la paradoja de la capital⁷

En Bogotá los números de seguridad son alentadores para los Gobiernos local y nacional, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del país. Al comparar el primer trimestre de 2019 con el mismo periodo del año pasado, la capital tuvo una reducción histórica del 20 por ciento en el número de homicidios. Por tercer año consecutivo, la ciudad registró un descenso en este delito. Las cifras señalan 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja en 40 años.

de Colombia, y uno de los más bajos del continente. Hace dos semanas, el Gobierno nacional anunció la llegada de 1.500 nuevos uniformados, pero la ciudad está lejos de superar el déficit de pie de fuerza. La administración distrital ha compensado esa falta de hombres en las calles mediante grandes inversiones: 250.000 millones de pesos cada año enfocados en adquirir equipos para combatir el crimen en la capital.

Irónicamente, todo esto ha sido posible a pesar de que Bogotá tiene el menor número de policías por habitantes

El nuevo programa para la reincorporación de exguerrilleros de las FARC

La ONU y el Gobierno colombiano presentaron un nuevo programa para la reincorporación de los excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, que tendrá una inversión de US\$3 millones (\$9.000 millones). La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación detalló en un comunicado que con la iniciativa se busca fortalecer social y económicamente a 2.500 desmovilizados.⁸

de distinta índole aún no han despegado. Para ello, este proyecto plantea, entre otras, brindar asistencia técnica integral a los proyectos productivos de los ETCR, fortalecer alianzas para el encadenamiento comercial y apoyar la comercialización.

Se trata de un proyecto destinado a fortalecer 15 ETCR a escala nacional, financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz. El propósito principal de la iniciativa es impulsar los proyectos productivos que ya están en marcha en esos espacios, pero que por dificultades

Por otro lado, en cinco de esos espacios, además del apoyo económico, ONU Mujeres y UNICEF trabajarán en un componente social enfocado a responder a uno de los principales llamados que han hecho las mujeres en proceso de reincorporación: la falta de espacios de cuidado para sus hijos, que limitaba su participación en los proyectos productivos.⁹

2018 fue el peor año para los líderes sociales en Colombia¹⁰

El programa Somos Defensores presentó su informe anual del año 2018, titulado "La naranja mecánica", acerca de la violencia contra líderes sociales en Colombia. En él se hace un resumen de las agresiones sufridas por los líderes y lideresas sociales en el país y el papel que ha jugado el gobierno actual.

de amenazas, encontramos que se pasó de reportar 370 en 2017 a 583 en 2018. Un incremento del 57 %.

En el transcurso de 2018, se registraron 805 agresiones contra líderes sociales, 245 más que en 2017. Esto representa un incremento del 43 %. Lo más preocupante es que, del total de agresiones que se registraron el año pasado, 155 fueron asesinatos, mientras que en 2017 la cifra fue de 106. En este ítem, el incremento fue del 46 %. Al revisar las cifras

¿Quiénes fueron los responsables? Somos Defensores señala que en 111 asesinatos no se ha determinado quién fue el responsable o qué estructura armada estuvo detrás. Se sabe, por ahora, que del total de asesinatos 16 corresponden a paramilitares, 12 a disidencias, 9 al ELN y 7 a la Fuerza Pública. Para la organización, que no se conozca la autoría en la mayoría de los casos se puede deber al temor a denunciar por razones de seguridad o que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios, haciendo difícil rastrear el autor intelectual.

El ELN acecha a los niños en el río San Juan (Chocó)¹¹

Por lo menos desde el 2005, los grupos armados han obligado a los niños indígenas del río San Juan a pelear una guerra que no es de ellos. Ahora El frente Che Guevara del ELN está reclutando menores de edad en esta zona. El caso más reciente se dio el 30 de marzo, cuando se llevaron a una adolescente indígena de 16 años. Las comunidades aseguran que a pesar de que han alertado sobre la situación y es ampliamente conocida como la razón del desplazamiento de los resguardos, las instituciones estatales no han hecho nada para prevenirla.

El reclutamiento también afecta a las comunidades negras que habitan en el río, pero estas no llevan un registro. Lo que tienen claro tanto indígenas como afrodescendientes es que

hay razones estructurales que facilitan el reclutamiento. "A los muchachos les toca tomar esas decisiones, ellos mismos buscan a los grupos que a veces los devuelven a sus casas. La falta de oportunidades, de empleo, de estudio, el abandono escolar y la falta de seguridad alimentaria los llevan a eso", afirma un líder.

La Fuerza Pública también es señalada de utilizar a los niños y ponerlos en riesgo. En la región, tanto afros como indígenas aseguran que miembros de la Armada se acercan a los caseríos y entablan conversaciones con niños y adolescentes para obtener información de inteligencia.

Con la Minga de Putumayo se prenden las movilizaciones¹²

Los 15 pueblos indígenas de Putumayo siguen en asamblea permanente, pues no llegaron a ningún acuerdo en las mesas de negociación que instaló el Gobierno en Semana Santa. La Minga insiste en que, al igual que en el Cauca, sus peticiones no son nuevas y que Duque les ha mandado funcionarios que no tienen capacidad para tomar decisiones.

Con esa movida, y justo cuando se vienen una marcha cafetera el miércoles y un paro nacional el jueves, la Minga en Putumayo es la primera mecha de las movilizaciones y

pinta difícil que el Gobierno y los indígenas logren llegar a acuerdos pronto.

El corazón de las peticiones de los indígenas putumayenses, como pasó con los del Cauca, es la tierra. La discusión giró en torno a tres puntos y en ninguno se ve una luz cerca para llegar a acuerdos. Piden que el Gobierno instale una oficina de la Agencia Nacional de Tierras en Mocoa, que la Agencia Nacional de Tierras tenga un equipo técnico conformado por indígenas de la Minga y que el Estado les compre tierras.

Apartadó, violencias de género y agenda de paz¹³

Apartadó hace parte de una región en las que los legados del conflicto armado se conectan con las vivencias cotidianas de mujeres y personas LGBTI, así como las dinámicas que imponen los grupos criminales que controlan las economías ilegales. Por eso, las agendas de construcción de paz deben reconocer que las percepciones de seguridad de estas poblaciones están atravesadas por las violencias de género que enfrentaron en el pasado y continúan enfrentando.

"El costo de perder de vista el enfoque de género en las etapas tempranas del posconflicto, no solo expone a estas poblaciones a un incremento de hechos violentos, sino

que socava pilares fundamentales de la construcción de paz como las garantías de no repetición, la reconciliación y la inclusión", asevera Fundación Ideas para la Paz en su informe Territorio, seguridad y violencias basadas en género en Apartadó.

Todo esto teniendo en cuenta que se trata de un municipio que hoy es epicentro del impulso económico en Antioquia, en el que ya se han dado procesos de reincorporación y hace parte de las apuestas de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.

En la Pradera las mujeres en proceso de reincorporación trabajan para su empoderamiento¹⁴

En el bajo Putumayo, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador, se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Pradera. Allí, más de 130 personas están llevando a cabo su reincorporación a la vida civil. De ellas, casi 50 son mujeres y decidieron tomar la palabra, organizarse y asegurar así su empoderamiento económico con su liderazgo.

El fruto del trabajo de estas mujeres es la Asociación de Mujeres Integrales del Común (ASOMIC), con la cual han creado y puesto en marcha varios proyectos, entre ellos, uno de piscicultura con geomembranas financiado por fondos

extrapresupuestarios del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas e implementado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y el PNUD.

"Somos 26 mujeres en la asociación. [La Asociación] se creó con el fin de sacar adelante a las mujeres excombatientes y proyectarnos hacia el futuro. Pensamos en salir adelante con proyectos y formación", cuenta Arlenys Sánchez, presidenta de la ASOMIC, quien asegura que organizarse ha sido para las mujeres de La Pradera una de las formas de asegurar su autonomía económica.

Excombatiente FARC en proceso de reincorporación es encontrado muerto en Catatumbo

En la tarde de este lunes 22 de abril, a las 5 y 20, se escucharon unos disparos en la vereda Campo Alegre, ubicado en la subregión del Catatumbo. Los campesinos del sector,

alertados por los sonidos de los impactos, se percataron que uno de ellos no había llegado a su casa. Se trataba de Dimas Torres Arévalo, un excombatiente de FARC en proceso de

reincorporación que se había radicado en el lugar con su esposa y sus hijos, y quien participaba activamente de los procesos de reincorporación con las Naciones Unidas.¹⁵

“Nos dimos cuenta de que el señor Dimar Torres no estaba, él había salido al corregimiento de Miraflores para comprar unas herramientas. De ahí salimos a donde se encontraba el Ejército a reclamarles que ellos lo tenían retenido y a la fuerza entramos al cambuche donde los soldados estaban dormidos y después unos 20 minutos de búsqueda en

ese sitio encontramos el cuerpo sin vida”, afirmó un líder comunitario de la zona.

El Ejército, por medio de un comunicado, anunció que a la zona fue enviada una comisión interdisciplinaria para investigar el caso, además, el comandante de esa institución, “ordenó desde Bogotá el desplazamiento de una comisión de la Inspección General de la Fuerza, cuyo objetivo es el de verificar los procedimientos operacionales desarrollados por las tropas en el lugar”.¹⁶

Exjefe de FARC denuncia propuesta ilegal para que incurra en delitos¹⁷

El exjefe de las FARC Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido como Joaquín Gómez, denunció supuestos seguimientos y maniobras para afectar su proceso de reinserción a la vida civil como parte del Acuerdo de Paz de La Habana.

En una carta enviada a la Procuraduría General, el excombatiente señaló: “He sido víctima de una constante hostilidad por agentes encubiertos y enemigos descubiertos del proceso de Paz e implementación. Diversas personas de la región han llegado de manera reciente a realizar propuestas para que me involucre con acciones ilegales [...]”

Mi respuesta a estas provocaciones a los Acuerdos de Paz, ha sido la de rechazar de manera contundente”.

Añade que organismos de inteligencia militar han manifestado falsamente que se está reuniendo con Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez el Paisa. Igualmente dijo que en reuniones de ganaderos de la zona a las que supuestamente asistió el presidente de Fedegan se ha preguntado sobre dinero que estaría recibiendo el desmovilizado por ganado ingresado de contrabando desde Venezuela y que se han hecho señalamientos de que se estaría rearmando para regresar a la ilegalidad.

Pacifista disponible en: <https://pacifista.tv/>

Semana disponible en: <https://www.semana.com/>

La Silla Vacía disponible en: <https://lasillavacia.com/>

El Tiempo disponible en: <https://www.eltiempo.com/>

El Colombiano disponible en: <http://www.elcolombiano.com/>

Misión de Verificación de la ONU: <https://colombia.unmissions.org/>

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: <https://pares.com.co/>

El Espectador disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias>

Ideas para la Paz disponible en: <http://www.ideaspaz.org/publications>